



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-002-2021-00203-01 (O2-23-086)
Accionante: WILLIAMS ARTURO CABARCAS GÓMEZ
Accionada: C I J GUTIERREZ Y CIA S.A. (EN TOMA DE POSESIÓN)
Procedencia: JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Asunto: MEDIDAS CAUTELARES – CAUCIÓN E INNOMINADAS

En Medellín, a los dieciocho (18) días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar decisión de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-002-2021-00203-01 (O2-23-086), instaurado por WILLIAMS ARTURO CABARCAS GÓMEZ, en contra de la sociedad C I J GUTIERREZ Y CIA S.A. (EN TOMA DE POSESIÓN), con el fin de resolver el recurso de apelación que fuera propuesto por el señor WILLIAMS ARTURO CABARCAS GÓMEZ, respecto del auto dictado el 31 de marzo de 2023 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “[p]or medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

1. ANTECEDENTES

El profesional del derecho WILLIAMS ARTURO CABARCAS GÓMEZ litigando en causa propia, promovió demanda ordinaria laboral en contra del ente societario C I J GUTIERREZ Y CIA S.A. (EN TOMA DE POSESIÓN), en lo sucesivo, CIJ, en procura de obtener el

reconocimiento y pago de la suma de \$7.920.612.133,82 por concepto del saldo insoluto de sus honorarios profesionales, junto con los intereses moratorios, perjuicios y las costas.

En respaldo de sus aspiraciones señaló el 11 de febrero de 2020 suscribió con la sociedad demandada un contrato de prestación de servicios de representación judicial, fugiendo como representante legal la señora Ana Umaina Sauda Palomino, quien valga decir, es depositaria provisional de CIJ por disposición de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. – SAE; que el objeto de la relación contractual comprende: a) *“...La representación de la empresa C.I.J GUTIERREZ Y CIA S.A. (EN TOMA DE POSESIÓN), para convocar a una conciliación extrajudicial en derecho, NACIONAL O INTERNACIONAL: con el objeto de procurar celebrar un acuerdo, el cual conllevaría al pago de la obligación pendiente a capital, más sus intereses, honorarios de abogado y demás gastos a que haya lugar de la mejor forma posible, en beneficio del CONTRATANTE...”*; b) *“...La representación judicial mediante ACCIONES CIVILES, mediante la presentación de demanda ejecutiva...”*, y; c) *“...La representación judicial mediante la iniciación de ACCIONES PENALES, en caso que no sean exitosas las acciones pretendidas en los literales A y B anteriores...”*.

Sostiene que, por concepto de honorarios se pactó una suma igual al 25% de las sumas dinerarias que se llegaren a recaudar a favor del empresario contratante y por concepto del pasivo a cargo de la sociedad extranjera Asahi Refining USA INC; subvención que se entregaría de acuerdo con el siguiente detalle de pagos:

a) *...Un pago anticipado equivalente al uno punto cinco por ciento (1.5%) sobre el valor del capital a recaudar, al momento de la firma del contrato y liquidados a la TRM del día de su desembolso...”*

b) *“...Un pago anticipado equivalente al uno punto cinco por ciento (1.5%), sobre el valor del capital a recaudar y liquidados a la TRM del día de su desembolso, un día antes de la fecha que fije el organismo nacional o internacional elegido para llevar a cabo la audiencia de conciliación, sea nacional o internacional, y/o procesos civiles, en todo caso este porcentaje se desembolsará antes de la fecha indicada para la realización de la audiencia de conciliación y se desembolsará independientemente si la audiencia de conciliación resulta fallida o no...”*

c) *“...El saldo restante, es decir, el veintidós por ciento (22%) del porcentaje pactado en el presente contrato, será pagadero a los diez (10) días hábiles siguientes posteriores al desembolso que llegare a realizar la sociedad ASAHI REFINING USA INC, como resultado de la gestión efectuada por el contratista ante las instancias planteadas en el objeto del presente contrato y pagaderas a la TRM del día de su pago o desembolso...”*;

Continúa exponiendo que los recursos recaudados totalizaron USD 9.626.052,08, y que a la fecha le adeudan tasa porcentual del que trata el literal C antes trasunto, por lo que considera le asiste derecho a sus pedimentos.

1.1. Trámite de primera instancia

La demanda y su posterior reforma se admitieron el 24 de marzo y el 13 de diciembre de 2022 (docs.05 y 28, carp.01), notificándose a la demandada CIJ el día 30 de marzo de esa anualidad (docs.07 y 08, carp.01), sociedad que, al momento de dar respuesta al escrito incoativo planteó oposición a la prosperidad de los pedimentos, aceptando como ciertos, entre otros, los hechos que hacen referencia a la existencia del contrato de prestación de servicios, el valor de los honorarios pactados y los términos a los que se sujetaban los mismos, de los restantes adujo no constarle. En su defensa, propuso las excepciones que individuó como cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación de pago de honorarios, prescripción, compensación y la genérica (doc.10, carp.01).

A posteriori, la parte actora solicita la implementación de la medida cautelar prevista en el artículo 85A del CPTSS, así como el embargo y secuestro de los bienes de propiedad de la sociedad demandada (docs.31 y 32, carp.01).

1.2. Decisión de Primera Instancia

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín en fecha 31 de marzo hogaño (docs.42 y 43, carp.01), resolvió la solicitud de medidas cautelares impetradas por el quejoso, disponiendo negar su decreto y posterior práctica.

Para sustentar su decisión, el cognoscente de primer grado no encontró probados los presupuestos de que trata el artículo 85A del CPTSS, puntualmente lo atinente a los actos tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia. Asimismo, estimó que las cautelas de embargo y secuestro no responden a la definición de las medidas cautelares innominadas conforme con los lineamientos esbozados por la Corte Constitucional (minuto 06:58 a 14:40, doc.43, carp.01).

1.3. Recurso de Apelación

El demandante se mostró en desacuerdo con la decisión el *a quo*, solicitando con la apelación se revoque la decisión adoptada en la primera instancia, para en su lugar, se acceda a la imposición de la caución y el embargo de los bienes de propiedad de la sociedad CIJ. Así las cosas, el recurrente aduce que al encontrarse la demandada en toma de posesión por la Sociedad de Activos Especiales SAE, existe el riesgo inminente a que se aplique la enajenación temprana de dichos bienes y con ello, se torne imposible de cumplir las obligaciones que surjan de la sentencia condenatoria.

De manera similar, asegura que el representante legal de la encartada, aseveró en una reunión extraordinaria de la Junta Directiva, que el fin del acuerdo a suscribir con la empresa Asahi Refining USA INC era el no pagar sus honorarios, por lo que colige que al momento de que sus pedimentos sean decididos en sede judicial, se efectuaran las maniobras que se estimen necesarias tendientes a obstaculizar el cumplimiento de la sentencia a su favor.

1.4. Trámite de Segunda Instancia

El recurso de apelación fue admitido el 17 de abril de 2023 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del 02 de mayo de la misma anualidad (doc.03, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran los alegatos de conclusión por escrito, de considerarlo del caso.

El impetrador (doc.04, carp.02), en sus alegaciones recaba se revoque la decisión que desestimó la solicitud de implementación de la caución y las medidas cautelares de embargo y secuestro de los bienes cuyo titular es la sociedad CIJ; insistiendo en los argumentos ampliamente expuestos en la diligencia llevada a cabo ante el juzgador de instancia. Por su parte, la parte accionada dentro del término legal guardó silencio.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el extremo litigioso por activa, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio del auto impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

2.1. Problema jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a establecer si en efecto, dentro del diligenciamiento judicial se muestra la necesidad impostergable de acceder al decreto de la caución, junto con el embargo y secuestro de bienes de la accionada; efecto para el que se exhibe necesario explicar los eventos en que se autoriza la aplicación del artículo 85A del CPTSS, junto con la naturaleza y fines de las cautelas en las actuaciones judiciales. Asimismo, la Corporación se ocupará de elucidar el contenido y alcance de las medidas cautelares innominadas de cara a lo delineado por la Corte Constitucional.

2.2. Sentido del Fallo – Tesis de la Sala

El sentido del fallo de esta Corporación será **confirmatorio** en tanto denegó el decreto de las medidas cautelares invocadas, como quiera que en el plenario no se probó que la demandada incurriera en una cualquiera de las causales consagradas en el artículo 85A del CPTSS, a la par que, las cautelas restantes no corresponden a las medidas innominadas a la luz del literal C del artículo 590 del CGP, con arreglo a los planteamientos que pasan a exponerse:

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

2.4. De las medidas cautelares

En norte a buscar una adecuada solución al escollo que plantea el asunto litigioso, *ab initio*, estima pertinente la Sala destacar que al momento en que se acude al aparato jurisdiccional, se demanda de la administración de justicia, materializada en los Jueces de la República, la resolución del conflicto y la declaración de la titularidad del derecho reclamado o sometido a controversia. Ahora, en las actuaciones que se surten ante la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y seguridad social, se concibe un ingrediente adicional que resulta de su fin principalísimo, que no es otro que “*lograr la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores*¹”, relaciones que dicho sea de paso, pueden enmarcarse dentro del

¹ CST, artículo 1.

*“derecho individual del trabajo de carácter particular y las de derecho colectivo, oficiales y particulares”*², de acuerdo a las garantías *ius fundamentales* contempladas entre otros, en el artículo 53³ de la CP y demás disposiciones tuitivas del compendio normativo nacional, entre las que se encuentran naturalmente, las medidas cautelares.

El rol entonces de las medidas cautelares es fundamental al interior de toda controversia, al punto que Calamandrei comprendía que *“[l]a función de las medidas cautelares nace de la relación que se establece entre dos términos: La necesidad de que la providencia, para ser prácticamente eficaz, se dicte sin retardo, y la falta de aptitud del proceso ordinario para crear sin retardo una providencia definitiva”*; de ahí que se entienda el rol fundamental de las medidas cautelares en toda relación jurídico-procesal, el que valga decir, se inclina a poner fin a la tensión existente en la necesidad de que la providencia definitiva nazca con las mayores garantías de justicia a través del regular y meditado desarrollo de toda una serie de actividades, que comporta una dilación en la resolución del conflicto, y el riesgo de convertir en prácticamente ineficaz la providencia definitiva, que parece destinada, por deseo de perfección, a llegar demasiado tarde⁴.

De igual manera dada la estrecha relación con principios y garantías constitucionales, el decreto de medidas cautelares no puede ser arbitrario, sino que por el contrario debe obedecer a criterios, parámetros y directrices razonadas, en aras de no vulnerar con su implementación derechos fundamentales a la contraparte.

Es así que la Corte Constitucional en sentencia C-379 de 2004, acudiendo a derecho comparado, como lo es el derecho español⁵, determinó los requisitos para su decreto en forma proporcional y razonada, presupuestos que hoy brotan en el CGP⁶ y en el CPACA⁷ que en síntesis se contraen a *“que (i) haya la apariencia de un buen derecho (“fumus boni iuris”), esto es, que el demandante aporte un principio de prueba de que su pretensión se encuentra fundada, al menos en apariencia; (ii) que haya un peligro en la demora (“periculum in mora”), esto es que exista riesgo de que el derecho pretendido pueda verse afectado por el tiempo transcurrido en el proceso; y, finalmente, que el demandante preste garantías o “contracautelas”, las cuáles están destinadas a cubrir los eventuales daños y perjuicios ocasionados al demandado por la práctica de las medidas cautelares, si con posterioridad a su adopción, se demuestra que éstas eran infundadas”*⁸; elementos todos que deben

² CST, artículo 3.

³ CP, artículo 53.

⁴ PARRA QUIJANO, Jairo. Medidas Cautelares Innominadas. Disponible en <https://letrujil.files.wordpress.com/2013/09/12jairo-parra-quijano.pdf>

⁵ Corte Constitucional, sentencia C-379 de 2004. Ver, por ejemplo, I Diez-Picazo Giménez. “Medidas Cautelares” en Enciclopedia Jurídica Básica, Madrid, Civitas, 1995, Tomo III, pp 4227 y ss.

⁶ CGP, artículo 592.

⁷ CPACA, artículo 231.

⁸ Corte Constitucional. Sentencia C-490 de mayo 4 de 2000, MP. Alejandro Martínez Caballero.

elucidarse caso por caso y de forma rigurosa previo a ordenar la implementación de cualquier cautela.

En efecto, en sana lógica, el proceso ordinario laboral no es ajeno a la necesidad de la implementación de esta clase de mecanismos, con miras, precisamente, a no tornar ilusorio los créditos cuya declaración y posterior satisfacción persigue, por lo general, el trabajador demandante, tal y como fuera adocinado por la Corte Constitucional en decisión C-043 de 2021.

Tras esa consideración, es menester indicar que las medidas cautelares innominadas por definición son aquellas que, a pesar de no encontrarse expresamente previstas en la ley, pueden ser decretadas, con apoyo particularmente en la potestad que tiene el funcionario judicial de esta especialidad, cuando además de la apariencia de buen derecho, *“hubiera fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra”*, como anteriormente se explicó.

Es precisamente en este punto, que no resulta acertada la solicitud incoada por el apoderado de la parte actora, por cuanto lo solicitado por aquel comporta el decreto medidas cautelares nominadas, v. gr., las de embargo y secuestro previstas en los artículos 593 y 595 del CGP; desconociendo así las directrices vertidas en la sentencia C-043 de 2021, de la cual se trasuntan algunos apartes:

“La medida cautelar innominada consiste en cualquier medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto de litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión. Actualmente esta medida está consagrada en la legislación nacional en procesos especiales regulados por la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones (artículos 245 al 249), la Ley 256 de 1996 (artículo 31) y la Ley 472 de 1998 (artículos 17, 25 y 26), entre otros. Asimismo, la medida cautelar innominada está incluida en las más importantes jurisdicciones de iberoamérica.

A su vez, la Corte Constitucional se ha referido a las medidas cautelares innominadas en la sentencia C-835 de 2013. **Sostuvo que se caracterizan porque no están previstas en la ley y responden a la variedad de circunstancias que se pueden presentar.** Igualmente, recordó que no son viables de oficio y solo pueden imponerse para *“proteger ciertos derechos litigiosos, prevenir daños o asegurar la efectividad de las pretensiones, dentro de parámetros que para su imposición, son claramente delineados por el legislador”*. Por último, destacó la finalidad que se atribuye a cualquier medida cautelar: *“prevenir que pudiera quedar ilusoria la ejecución del fallo o cuando hubiera fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra”*.
-Negritas y subrayado intencional de la Sala-

De tal suerte que, para la Sala, no se equivocó el *a quo* al desestimar la petición tendiente a decretar el embargo y secuestros de los bienes, acciones o cuotas de propiedad de la sociedad CIJ, y siendo ello así, se confirmará la decisión este punto del disenso.

Por otro lado, se destaca que el artículo 85A del CPTSS, contempló la posibilidad de que el juzgador imponga al demandado la obligación de consignar una suma dineraria entre el 30% y el 50% del valor total de las pretensiones, a órdenes del proceso y a título de caución, siempre que se demuestre que aquel se encuentra desarrollando actos tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, o cuando se demuestre que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, so pena de no ser siquiera escuchado en juicio.

Aquí es importante precisar que, a fin de que la solicitud de medida cautelar esté llamada a salir adelante, es menester que la parte actora, conforme lo dispone el artículo 167 del CGP, lleve al convencimiento del juzgador que la sociedad demandada ciertamente se encuentra *in curso* de una cualquiera de los escenarios contemplados en el punto retropróximo.

Con tal propósito, el censor centró el ataque en la posibilidad de que, dentro del proceso de extinción de dominio del cual es parte la encartada CIJ, se haga uso de la figura de la enajenación temprana contemplada en el artículo 97 de la Ley 1708 de 2014, modificado por el artículo 24 de la Ley 1849 de 2017; a más de que, a su juicio, *“...la sociedad C.I.J GUTIÉRREZ, en toma de posesión tiene una serie de dificultad(sic) para el cumplimiento de sus obligaciones, porque precisamente por la actividad de C.I.J GUTIÉRREZ, que es la exportación de oro, precisamente por eso está en un trámite de extinción, todas las normas de lavado de activo por la cual se regulan las sociedades en el mercado internacional, en un momento de una toma de posesión como en la que está C.I.J GUTIERREZ, merma inmediatamente cualquier intercambio comercial, [p]recisamente con ocasión del contrato de prestación de servicios profesionales, que ejercí a favor de C.I.J GUTIÉRREZ una de las dificultades de la compañía a la cual yo le cobré la obligación fue precisamente esa que C.I.J GUTIÉRREZ, estaba en toma de posesión, con una medida y que no querían contaminarse con el pago de la obligación de los 10 millones de dólares, por las reglas internacionales relativas al lavado de activo, luego sí hay una serie de dificultad para el cumplimiento de sus obligaciones tendientes a impedir la efectividad de la sentencia...”*

Especificó que *“...en el acta 04 del 26 de enero del 2021 de la Reunión Extraordinaria de la Junta Directiva de la empresa demandada; se evidencia la mala fe del representante legal de la demandada, pues el único objetivo de realizar o alcanzar el acuerdo de manera directa con la empresa ASAHI REFINING USA INC, era para no pagar los honorarios profesionales*

pactados con el suscrito apoderado demandante, quien fue el que alcanzó el acuerdo por vía extrajudicial (arreglo directo- transacción), por lo tanto al momento de que mis pretensiones sean decididas y se dé un fallo judicial a mi favor, hará todas las acciones necesarias para...impedir la efectividad de la sentencia...”; argumentos todos, con los que asegura se dan por cumplidos todos los escenarios que plantea el artículo 85A del CPTSS antes explicado.

Como elementos suasorios, la parte actora arrimó el certificado de existencia y representación de la accionada (págs.21 a 33, doc.31, carp.01); borrador del escrito de acuerdo de liquidación (conciliación) (págs.34 a 53, doc.31, carp.01); acta de reunión extraordinaria de la junta directiva de CIJ (págs.54 a 62, doc.31, carp.01), y; acuerdo de pago del 02 de febrero de 2021 celebrado entre CIJ y la empresa extranjera Asahi Refining USA INC (págs.63 a 94, doc.31, carp.01).

Puestas así las cosas y escrutados los medios de convicción que fueran arrimados al plenario, conforme las directrices previstas en el artículo 61 del CPTSS, encuentra esta Corporación que los hechos, o mejor aún, el contenido de las probanzas y las manifestaciones expuestas por el impetrador no tienen la entidad de tornar procedente la adopción de las medidas consagradas en el artículo 85A del CPTSS, como bien lo coligió el fallador de primer nivel. Ello así, en tanto en cuanto, no se evidencia que tales medios probatorios muestren las graves dificultades económicas por las que atraviesa la sociedad CIJ y que materialmente puedan impedir el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de una eventual condena, o bien, el despliegue de maniobras engañosas para el ocultamiento de los bienes de su propiedad.

Nótese que, si bien es cierto, la sociedad accionada se encuentra en posesión de la SAE, no es menos cierto que esta última entidad no se constituye como nueva propietaria de la encartada, sino que, por el contrario, su función es derivada de las facultades otorgadas por la Ley 1708 de 2014 a la Fiscalía General de la Nación dentro de un proceso de extinción de dominio; toma de posesión cuyo fin último es procurar la conservación de los bienes otorgados en custodia a fin de que sean productivos en los términos del Decreto 1535 de 2017 y el Decreto Ley 903 de 2017; de consiguiente, se descarta *prima facie*, por esta sola situación, la insolvencia o iliquidez que insinúa la censura. Otro tanto ocurre con la figura jurídica de enajenación temprana a la que se acude en la alzada, pues como bien lo adujo el juzgador de instancia, la aplicación de esta figura es condicionada a la demostración de una cualquiera de las causales de trata el artículo 93 de la Ley 1708 de 2014 y que responden a: 1. *Sea necesario u obligatorio dada su naturaleza;* 2. *Representen un peligro para el medio ambiente;* 3. *Amenacen ruina, pérdida o deterioro;* 4. *Su administración o custodia ocasionen, de acuerdo con un análisis de costo-beneficio, perjuicios o gastos desproporcionados a su valor o administración;* 5. *Muebles sujetos a registro, de género, fungibles, consumibles, perecederos o los semovientes;* 6. *Los que sean materia de expropiación por utilidad pública, o servidumbre,*

y; 7. *Aquellos bienes cuya ubicación geográfica o condiciones de seguridad implique la imposibilidad de su administración. Bienes que el FRISCO tenga en administración por cinco (5) años o más, contados a partir de su recibo material o su ingreso al sistema de información de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), S.A.S., el administrador del FRISCO podrá aplicar esta causal sin acudir al comité de que trata el primer inciso del presente artículo;* factores determinantes que no se adecuan al caso de la sociedad CIJ o por lo menos aquí no se demostró su ocurrencia.

Para efectos de ampliar en el argumento, recalca la Sala que el impulsor no probó una mengua o disminución importante y profunda en las utilidades de la sociedad convocada, para así demostrar que el giro ordinario de los negocios explotados ya no es rentable y que se encuentra a puertas de una grave crisis económica o bien que acudió al uso de maniobras engañosas con el ánimo de burlar los intereses del trabajador, quedando solo en la especulación y a la interpretación de la parte actora, el alcance de los hechos en los que apoya su petición.

Como colofón de lo dicho, no deviene en equivocada la inferencia del juez singular, y por tanto se dispondrá por la Sala la confirmación de la providencia de primer grado, en cuanto negó las medidas cautelares peticionadas por WILLIAMS ARTURO CABARCAS GÓMEZ en contra de la sociedad CIJ.

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del CGP, y advirtiéndolo que, el recurso de apelación se resolvió de manera desfavorable al demandante señor WILLIAMS ARTURO CABARCAS GÓMEZ, a su cargo se impondrán las costas de esta instancia, en atención a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP. De conformidad con el Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan como agencias en derecho para la segunda instancia, la suma de 1 SMMLV, vale decir, \$1.160.000.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral,**

4. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR íntegramente el auto 31 de marzo de 2023 dictado por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por WILLIAMS ARTURO CABARCAS GÓMEZ, en contra de la sociedad C I J


GUTIERREZ Y CIA S.A. (EN TOMA DE POSESIÓN), según y conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

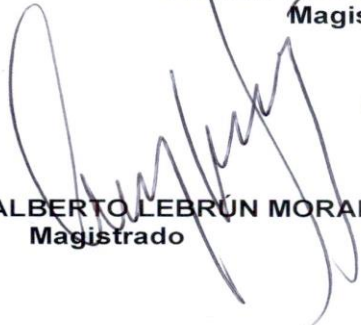
SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo del señor WILLIAMS ARTURO CABARCAS GÓMEZ, fíjense como agencias en derecho de segunda instancia la suma de 1 SMMLV, vale decir, \$1.160.000.


Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**, en los términos previstos en el artículo 41 literal c) del estatuto instrumental laboral.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

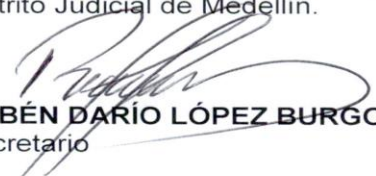

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

LA SECRETARÍA DE LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN CERTIFICA:

Que esta providencia fue notificada en los **ESTADOS No. 144**, fijados en la secretaría del Tribunal, hoy **22 de agosto de 2023** a las 08:00am,

los cuales pueden ser consultados en ["Publicación de Estados Electrónicos SL-TSM"](#)

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS
Secretario